



PE- 055-2014

Bogotá D.C., 5 de mayo de 2014

Doctor

RAFAEL MEJÍA LÓPEZ

Presidente

Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC

Ciudad

Apreciado doctor Mejía:

Durante los últimos diez años Colombia ha suscrito más de una docena de Tratados de Libre Comercio, cuyos procesos de desgravación avanzan a ritmos diferentes pero sin tregua, con resultados que, definitivamente, no se compadecen con la promesa de valor de las negociaciones y las solemnes ceremonias de ratificación, que ofrecían la apertura de enormes mercados para nuestros productos y, para los consumidores colombianos, el beneficio de una inmensa oferta global compitiendo de igual a igual en nuestro mercado local.

Nada de eso ha sucedido, con excepción del incremento de las importaciones, impulsadas además por un peso revaluado y amenazando a diversos renglones productivos, sobre todo en el sector agropecuario, pero también en la industria. No en vano se empiezan a sentir voces que claman por la renegociación de los tratados, una alternativa que se ha considerado como un imposible por parte del Gobierno, pero la cual es preciso valorar con objetividad frente a las actuales circunstancias, para considerar siquiera un aplazamiento de los procesos de desgravación mientras el próximo Gobierno avanza, de una vez por todas, en una Agenda Interna con plazos y recursos garantizados, que les permita a los productores colombianos acceder a las ventajas del libre intercambio y no solo sufrir las consecuencias del desequilibrio competitivo.

Los TLC: una mirada a los resultados

La prueba ácida de una política de internacionalización económica es la balanza comercial, que en los dos primeros meses ya fue deficitaria en US\$315 millones y puede llegar, a juicio de expertos, a los US\$2.000 millones al cierre de 2014, con un déficit en cuenta corriente -léase incapacidad de pagar por esas mayores importaciones- que puede estar por encima del 4.5% del PIB. El próximo 15 de mayo se completarán dos años de vigencia del TLC con Estados Unidos, con una balanza comercial que se ha venido deteriorando para Colombia y es responsable del mayor peso del actual desequilibrio. Pasamos de tener un saldo positivo superior a los US\$9.000 millones en 2011, a uno inferior a los US\$3.000 millones en 2013. En el mismo año, el déficit comercial con Mercosur fue de US\$2.123 y con México de US\$4.436 millones, mientras que con la Unión Europea ya se registra una tendencia a la baja.

La posición de Fedegán

Desde que se comenzó a hablar de TLC, hace más de una década, Fedegán nunca se opuso a lo que aun considera un imperativo de la globalización, siempre y cuando se den dos condiciones: la primera, que en las negociaciones se equilibraran las asimetrías entre nuestra economía y la de los países contratantes; y la segunda, que el Gobierno implementara una Agenda Interna que propicie la reconversión del sector



Dirección : Calle 37 # 14 - 31 Bogotá D.C. Colombia
Teléfono : (057) 5782020 Fax : (057) 5782102
web : www.fedegan.org.co
e-mail : fedegan@fedegan.org.co

agropecuario para equilibrar las brechas de competitividad e impedir que los TLC se conviertan, como en efecto sucedió, en tratados “embudo” o de una sola vía.

Agenda Interna: la gran omisión del Gobierno

Frente a la primera condición los gremios participamos en los espacios y con el alcance que el Gobierno permitió, pero la responsabilidad de los resultados es exclusiva del Gobierno mismo en su calidad de negociador. Frente a la segunda, relacionada con el diseño y ejecución de una Agenda Interna, nuestra gestión fue acuciosa, ya sea en los temas transversales a todo el sector agropecuario, como el volumen y las condiciones del crédito de fomento o el muy sensible de las vías terciarias, o bien, en aquellos específicos de la actividad ganadera. En estos últimos obtuvimos respuestas a nivel de promulgación de instrumentos de política pública, pero muy poco o nada en materia de asignación de recursos y cumplimiento real de los compromisos gubernamentales.

Todos los gremios agropecuarios, absolutamente todos, en diversos tonos y en diferentes momentos, con insistencia y convicción, hemos planteado propositivamente los elementos de la Agenda Interna, no solo para generar las condiciones de infraestructura física y social que requiere el desarrollo, sino para crear los instrumentos de reconversión de cada renglón de la producción.

El Aplazamiento: un imperativo social y ético para el Gobierno

Han transcurrido 11 años desde que se iniciaron las negociaciones del TLC con Estados Unidos en 2003, lapso durante el cual no solo se modificó nuestra posición competitiva por el factor cambiario, de una tasa que se acercaba a los \$3.000 pesos por dólar, a la actual, que no logra estabilizarse siquiera en los \$2.000 por dólar. Además de esta situación, que representa una pérdida de competitividad efectiva del orden del 33%, la Agenda Interna que habría de restituir el equilibrio no avanzó y en algunos casos retrocedió inclusive. Desde entonces hemos venido solicitando instrumentos de política pública para la reconversión competitiva.

Hemos dado pasos atrás en el asunto crítico de la seguridad rural principalmente, y en infraestructura, el país de 2014 no difiere mucho del de 2003. Apenas se están tratando de terminar las dobles calzadas que se iniciaron en la época, pero la situación de la red terciaria es igual o peor. En riego no se ha avanzado un ápice; la promesa de control al costo de los insumos sigue incumplida, el crédito agropecuario insuficiente y a espaldas de la realidad productiva rural, en tanto que la situación en educación, salud y vivienda rural no presenta modificaciones sustanciales.

Tuvo que surtirse un proceso negociación con un grupo narcoterrorista para que el Gobierno, por fin, se comprometiera con el Censo Agropecuario y la actualización catastral que los gremios hemos pedido durante décadas. Pero dentro del contexto de tales negociaciones, el Gobierno se allanó a negociar con las Farc lo que nunca quiso acordar con los gremios: el Desarrollo Rural Integral, y en ese ‘sí-se-puede’ con los interlocutores equivocados, entre otros acuerdos conocidos y muchos secretos, se cubrió a la propiedad privada de la tierra con un manto de inseguridad jurídica que, literalmente, ha espantado a la inversión privada que se requiere con urgencia.

Por estas razones, si el Gobierno -no este en particular sino el Gobierno como institución- no hizo lo que tenía que hacer; si han pasado casi tres lustros desde que se dio la largada para la carrera de la internacionalización, pero el desarrollo rural colombiano se quedó en el partidito mientras los otros



competidores avanzaban; si el tiempo siguió detenido para el campo cuando tenía que haberse aprovechado al máximo, entonces la posibilidad de suspender esa carrera desbocada entre competidores desiguales, de sacar una verdadera 'bandera amarilla' para detenerla temporalmente y restituir las condiciones de competencia, no solo surge como alternativa que merece consideración, sino como un imperativo social y ético para el Gobierno.

Para el caso de la producción de leche, el impacto acumulado de los TLC se suma a la desastrosa negociación láctea con la UE, para amenazar la subsistencia de cerca de 300.000 ganaderos, en su mayoría pequeños productores campesinos, para quienes la quincena lechera representa su salario mínimo y a los que no se les ha ofrecido posibilidades efectivas de asociación, ni de conexión con los mercados, ni de mejora de sus condiciones de vida. Una verdadera catástrofe social en las grandes cuencas lecheras minifundistas principalmente.

Por ello creo en la posibilidad de que los gremios afectados, tanto en el sector agropecuario como en el industrial, puedan allanar las diferencias de sus intereses específicos y hacer un frente común para evaluar la posibilidad de aplazamiento de los TLC más lesivos, con el de Estados Unidos y la Unión Europea en primera instancia.

Creo, igualmente, que en el comercio internacional bilateral nada está escrito en piedra, y que con países como Estados Unidos, con el que siempre hemos tenido una clara identidad ideológica y política, así como una larga tradición de cooperación y de alianza en temas tan estratégicos como la seguridad continental, el narcotráfico y la preservación de la democracia, la discusión de un eventual aplazamiento no nos colocaría en una situación de incumplimiento o falta de seriedad frente a compromisos adquiridos que, sin embargo, pueden ser modificados.

En el entorno de confusión que el Gobierno ha creado alrededor del Desarrollo Rural, a partir de los compromisos simultáneos con las Farc, con los espacios de participación del Pacto Agrario y con una Misión Rural de alto nivel, no será fácil que se comprometa con una eventual solicitud de aplazamiento de los TLC, aunque, sin duda alguna, una decisión en tal sentido representaría un desactivador de la protesta social y hasta un elemento de apoyo a su cuestionable proceso de negociación con las Farc.

Para el sector productivo sería un respiro en la búsqueda de la competitividad y para el próximo Gobierno una última oportunidad para el cumplimiento de los compromisos históricos con el campo. De no ser posible, habrá que multiplicar recursos y redoblar esfuerzos para hacer competitivo al sector agropecuario en el menor tiempo posible, y salvar así al campo de un verdadero desastre social".

Cordial saludo,



JOSÉ FÉLIX LAFAURIE RIVERA
Presidente Ejecutivo

